

Bogotá D.C.,

		
	1 3 0 0 2 0 2 5 E 3 0 2 2 3 4 7	
	Al responder por favor cite este número 13002025E3022347	
	Fecha Radicado: 2025-12-16 14:57:08	
	Código de Verificación: c3600	Folios: 4
Radicador: Ventanilla Minambiente		Anexos: 0
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		

MEMORANDO

PARA: EDITH MAGNOLIA BASTIDAS CALDERÓN
Viceministra de Políticas y Normalización Ambiental

DE: LAURA CAMILA RAMOS DÍAZ
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: Respuesta memorando No. 20002025E3019611 en relación con el documento técnico- jurídico remitido por PNNC – En cumplimiento a la Orden 3, numeral 1.1.1 Sentencia "Ventanilla Minera"

Cordial saludo,

En consideración al memorando del asunto a través del cual el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental pone en conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica el documento¹ construido por Parques Nacionales Naturales denominado "*Reservas Naturales de la Sociedad Civil como Áreas Excluibles de Minería*" y solicita un pronunciamiento al respecto en el marco del cumplimiento de la sentencia AP2013-02459-01² (numeral 1.1.1); a continuación, se presentan las siguientes consideraciones:

Sobre lo planteado por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC).

La oficina Asesora jurídica ha adelantado un análisis minucioso de lo expuesto por PNNC concluyendo que, en efecto, el artículo 2.2.2.1.17.3 del Decreto 1076 de 2015 define los usos y actividades a los cuales podrán dedicarse las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, enunciando un listado de diez (10) actividades que la norma denomina como *sustentables*, dentro de las cuales no se encuentra la actividad minera.

Dado que las áreas de Reserva de la Sociedad Civil hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y surgen como un ejercicio de gobernanza privada en virtud de la función ecológica de la propiedad, sería posible sostener que, con

¹ Remitido a esta cartera por parte de la Coordinación del Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental a través de radicado 20252302048601 de esa entidad.

² Sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Consejo de Estado el día 04 de agosto de 2022, aclarada y adicionada mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2022 que ha sido denominada como "Ventanilla Minera".

sustento en el principio de legalidad, solo se pueden desarrollar las actividades expresamente permitidas en el Decreto compilatorio³, sin embargo; bajo una mirada integral del ordenamiento jurídico, no se puede perder de vista que el artículo 34⁴ de la Ley 685 de 2001⁵ establece como requisitos de exclusión de la minería, entre otras cosas, que las áreas respectivas expresamente excluyan dichos trabajos y obras y que sean delimitadas con base en estudios técnicos, sociales y ambientales.

En ese sentido y teniendo en cuenta que el análisis jurídico presentado por PNNC hace una invitación a *“reestructurar su⁶ calidad de excluible o no, así como mejorar su interpretación a nivel interinstitucional y en especial dentro del sector minero de cara a determinar la conveniencia, o no, de someterlas al requerimiento del certificado ambiental”*, desde la Oficina Asesora jurídica se considera oportuno que, previo a emitir un concepto jurídico, se desarrollen espacios de coordinación tanto con el sector minas como con PNNC, máxime teniendo en cuenta que la solicitud de esa entidad trae consigo consecuencias frente al cumplimiento de otras órdenes de la sentencia que aquí nos ocupa, como lo son la orden tercera numerales 1.1.3⁷, 1.1.5⁸ y 1.3.1⁹.

En aras de fortalecer la necesidad de llevar a cabo los espacios con PNNC y la Agencia Nacional de Minería para tratar este asunto, vale la pena poner de presente que el fallo de ventanilla minera hace un enfático llamado a la coordinación entre el sector ambiente y desarrollo sostenible y el sector minas energía, específicamente en la orden tercera numeral primero (del cual se desprende el numeral 1.1.1) donde ordena:

³ Artículo 2.2.2.1.17.1 previamente citado.

⁴ Cuya línea de interpretación ha sido dada por la Ho. Corte Constitucional en sentencias como la C339 DE 2002.

⁵ Código de Minas

⁶ Refiriéndose a las Áreas de Reserva de la Sociedad Civil.

⁷ 1.1.3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fundamento en los documentos mencionados en los dos numerales anteriores, en el término de tres (3) meses, contados a partir de la presentación de estos documentos, elaborará y adoptará, mediante acto administrativo, la cartografía de las áreas de protección, haciendo uso de la figura prevista en el artículo 47 del CNRR y en el Decreto 1374 de 2013, a efectos de prohibir en tales áreas el desarrollo de todo tipo de actividad minera, hasta que exista certeza sobre la compatibilidad de esa labor con la zonificación de cada territorio protegido.

⁸ 1.1.5. La Agencia Nacional de Minería, de manera definitiva, actualizará la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las “zonas de minería restringida” que reporta Anna Minería, una vez finalicen los procesos de zonificación de aquellas áreas en las que existía duda sobre la compatibilidad, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Código de Minas.

⁹ 1.3.1. La Agencia Nacional de Minería, deberá exigir a los proponentes que aporten con su solicitud de titulación un certificado de las autoridades ambientales competentes en el que se informe: (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de esta sentencia; (ii) si tal territorio se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación. En el evento en que se presenten dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia Nacional de Minería deberá abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que exista certeza sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al principio de precaución. Para tal efecto, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, y junto con las entidades de los sectores minero y ambiental que estimen competentes, establecerán previamente: (i) el procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los certificados, (ii) los plazos máximos para la expedición de los certificados, y (iii) las garantías al debido proceso de los peticionarios.

“NUMERAL 1. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería, que apliquen los artículos 16, 34, 36, 53, 270, 201, 271, 273 y 274 del Código de Minas, respetando lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C-389 de 2016, para lo cual adoptarán las siguientes acciones (...)”

Así las cosas, desde el Grupo de Procesos Judiciales, a través de la apoderada judicial de la sentencia, se adelantó un dialogo con la profesional¹⁰ a cargo de la gestión del cumplimiento del fallo, quien, en sus buenas gestiones, programó un espacio con PNNC que se llevó a cabo el pasado viernes 12 de diciembre a las 11:30 am de manera virtual y contó con la participación de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Territorio, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la Dirección de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana, el Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental.

Una vez finalizado ese espacio y de conformidad a las conclusiones a las que se llegaron en ese espacio, donde PNNC se mantiene en su posición respecto de la exclusión minera de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y que la autoridad minera requiere una formalidad adicional para registrarlo en la plataforma Anna Minería, se recomienda avanzar con el espacio de coordinación con Agencia Nacional de Minería a efectos de definir los efectos del documento remitido por PNNC en el marco del cumplimiento de la sentencia de Ventanilla Minera de manera que se defina una línea de acción conjunta tal como lo establece el Ho. Consejo de Estado en el mismo fallo.

Finalmente, esta OAJ continuará brindado el apoyo respectivo en este asunto y en todos los demás que surjan en el marco de la sentencia 2013-02459-01 para lo cual se podrán comunicar con la profesional a cargo, Catalina Montenegro Diaz, al correo electrónico LCMontenegroD@minambiente.gov.co

Cordialmente,

LAURA CAMILA RAMOS DÍAZ

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Anexos: N/A

Revisó: Sonia Alejandra Agudelo – Coordinadora GPJ
Elaboró: Catalina Montenegro Diaz – Contratista OAJ

¹⁰ Diana Gonzales, Adscrita al VPNA.